



FONDO INTERNACIONAL
DE INDEMNIZACIÓN DE
DAÑOS DEBIDOS A LA
CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS 1992

COMITÉ EJECUTIVO
30ª sesión
Punto 3 del orden del día

92FUND/EXC.30/9
22 septiembre 2005
Original: INGLÉS

SINIESTROS QUE AFECTAN AL FONDO DE 1992

PRESTIGE

Nota del Director

Resumen:

La aseguradora P&I del propietario del buque y el Fondo de 1992 han establecido oficinas de reclamaciones en La Coruña (España) y Burdeos (Francia). Se han recibido reclamaciones por un total de €829 millones (£561 millones)^{<1>} en la oficina de España y reclamaciones por un total de €97 millones (£66 millones) en la oficina de Francia. El Gobierno portugués ha presentado una reclamación de €4,3 millones (£3,0 millones) respecto a la limpieza y medidas preventivas en Portugal.

La cuantía total de las reclamaciones aceptadas derivadas del siniestro del *Prestige* rebasará considerablemente la cuantía total de indemnización disponible, 135 millones de Derechos Especiales de Giro, correspondientes a €171,5 millones (£116 millones). En mayo de 2003, el Comité Ejecutivo decidió que los pagos del Fondo de 1992 se limitasen de momento al 15% de la pérdida o daños en efecto sufridos por los respectivos reclamantes, determinados por los peritos contratados por el Fondo y la aseguradora.

El Gobierno español aprobó una legislación en forma de Reales Decretos-Ley que facilitaban fondos para indemnizar íntegramente a los damnificados por la contaminación. Según información facilitada por el Gobierno español, se han logrado acuerdos con la gran mayoría de los trabajadores del sector de la pesca y se les han efectuado pagos por un total aproximado de €88 millones (£60 millones) en virtud de los Reales Decretos-Ley.

Se ha informado al Fondo de 1992 de que se han presentado también 971 reclamaciones en virtud de esta legislación. Estas reclamaciones serán evaluadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, una organización de seguros de propiedad estatal, siguiendo los criterios empleados para aplicar los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992.

En octubre de 2003, el Gobierno español presentó una reclamación de €383,7 millones (£260 millones). El Director efectuó una evaluación provisional de la reclamación, llegando a la cifra de €107 millones

<1> La conversión de divisas en este documento se ha hecho sobre la base de los tipos de cambio al 16 de septiembre de 2005 (€ = £0,6772) excepto en lo que se refiere a los pagos efectuados por el Fondo de 1992, en que la conversión se ha efectuado al tipo de cambio en la fecha de pago.

(£72 millones), y sobre esta base se efectuó un pago del 15% de esa cuantía, es decir, €6 050 000 (£11,1 millones).

El Director efectuó también una evaluación general del total de los daños admisibles en España derivados del siniestro del *Prestige*, resultando una cifra total de por lo menos €303 millones (£205 millones). Llevada a cabo la evaluación, y como lo autorizó la Asamblea, el Director efectuó otro pago de €41 505 000 (£28,8 millones) contra una garantía proporcionada por un banco español, elevando la cuantía total abonada al Gobierno español por el Fondo de 1992 a €57 555 000 (£39,9 millones).

El Gobierno español ha presentado posteriormente nuevas reclamaciones. La cuantía total reclamada por el Gobierno español es de €662,5 millones (£449 millones).

Medida que ha de adoptarse:

Tomar nota de la información.

1 El siniestro

- 1.1 El 13 de noviembre de 2002, el buque tanque *Prestige* (42 820 AB), matriculado en las Bahamas, que transportaba 76 972 toneladas de fuel oil pesado, empezó a escorarse y a derramar hidrocarburos a unos 30 kilómetros del Cabo Finisterre (Galicia, España). El 19 de noviembre, cuando estaba siendo remolcado para alejarlo de la costa, el buque se partió en dos y se hundió a unos 260 kilómetros al oeste de Vigo (España), la sección de proa a una profundidad de 3 500 metros y la sección de popa a una profundidad de 3 830 metros. La rotura y hundimiento derramaron una carga que se calcula en torno a 25 000 toneladas. Durante las semanas siguientes continuó la fuga de hidrocarburos del pecio a un ritmo decreciente. Posteriormente, el Gobierno español calculó que quedaban en el pecio aproximadamente 13 800 toneladas de carga.
- 1.2 Debido a la naturaleza altamente persistente de la carga del *Prestige*, los hidrocarburos fueron a la deriva con los vientos y las corrientes por mucho tiempo, cubriendo grandes distancias. Los hidrocarburos contaminaron fuertemente la costa occidental de Galicia (España) y finalmente se desplazaron hasta el Golfo de Vizcaya, afectando a la costa norte de España y la costa occidental de Francia.
- 1.3 En España se efectuaron importantes operaciones de limpieza en el mar y en tierra. También se efectuaron considerables operaciones de limpieza en Francia. Se emprendieron operaciones de limpieza en el mar en aguas de Portugal.
- 1.4 El *Prestige* estaba inscrito en la London Steamship Owners Mutual Insurance Association (London Club).
- 1.5 Para los detalles de las operaciones de limpieza y el impacto del derrame, se hace referencia a los documentos 92FUND/EXC.24/5, 92FUND/EXC.24/5/Add.1 y 92FUND/EXC.25/3/1.

2 Extracción de los hidrocarburos del pecio

- 2.1 El Gobierno español creó un Comité Técnico Internacional bajo la coordinación de la empresa petrolera española Repsol YPF para estudiar posibles métodos de extracción de los hidrocarburos del pecio.
- 2.2 En diciembre de 2003, tras efectuar pruebas en el Mediterráneo y luego en el lugar del siniestro, el Gobierno español decidió que la carga restante en el pecio se extrajese mediante lanzaderas rígidas de aluminio que se llenan por gravedad a través de perforaciones practicadas en los tanques. Se firmó un contrato entre el Gobierno español y Repsol YPF para extraer los hidrocarburos restantes del *Prestige*. La extracción del petróleo, que comenzó en mayo de 2004, finalizó en septiembre de 2004. Se extrajeron unas 13 000 toneladas de carga de la sección de

proa del pecio. Quedaban aproximadamente 700 toneladas en la sección de popa, que fueron tratadas con agentes biológicos dirigidos a acelerar la degradación de los hidrocarburos.

- 2.3 El Gobierno español ha presentado una reclamación de €109,2 millones (£74 millones) por la operación de extraer los hidrocarburos restantes del pecio. Esta reclamación plantea una cuestión de principio en cuanto a la admisibilidad. Esta cuestión se trata en una adición al presente documento.

3 Oficinas de Reclamaciones

Previendo un gran número de reclamaciones, y tras consultar con las autoridades españolas y francesas, el London Club y el Fondo de 1992 establecieron Oficinas de Reclamaciones en La Coruña (España) y Burdeos (Francia).

4 Reclamaciones de indemnización

España

- 4.1 Al 20 de septiembre de 2005, la Oficina de Reclamaciones de La Coruña había recibido 741 reclamaciones por un total de €829 millones (£561 millones). Entre ellas figura una reclamación de €132 millones (£89 millones), de un grupo de 58 asociaciones de Galicia, Asturias y Cantabria que representan a 13 600 pescadores y mariscadores, y cinco reclamaciones del Gobierno español. La primera reclamación del Gobierno español era de €383,7 millones (£260 millones), presentada en octubre de 2003, la segunda de €44,6 millones (£30 millones), presentada en enero de 2004, la tercera de €55,5 millones (£58 millones), presentada en abril de 2004, la cuarta, presentada en dos partes, la primera en diciembre de 2004 y la segunda en abril de 2005, por €57,2 millones (£106 millones) y la quinta por €87,8 millones (£59 millones). La primera, segunda y tercera reclamaciones comprendían partidas por el coste de operaciones de limpieza en el Parque Nacional Atlántico, que ascendía a €1,9 millones (£8 millones) en total. Estas partidas han sido retiradas, ya que los fondos para estas operaciones se han obtenido de otra fuente. Esta retirada, junto con enmiendas posteriores, ha llevado la cuantía total reclamada por el Gobierno español a €662,5 millones (£449 millones).
- 4.2 Las reclamaciones presentadas por el Gobierno español se refieren a los costes contraídos respecto a operaciones de limpieza en el mar y en tierra, extracción de los hidrocarburos del pecio, pagos de indemnización a pescadores y mariscadores, desgravación fiscal a empresas afectadas por el derrame, costes de administración y costes relativos a campañas publicitarias.
- 4.3 El cuadro a continuación presenta un desglose de las diferentes categorías de reclamaciones recibidas por la Oficina de Reclamaciones de La Coruña.

| Categoría de la reclamación | No. de reclamaciones | Cuantía reclamada € |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Daños materiales | 229 | 2 907 732 |
| Limpieza | 16 | 4 161 279 |
| Maricultura | 12 | 8 142 675 |
| Pesca y marisqueo | 153 | 134 861 755 |
| Turismo | 10 | 612 472 |
| Elaboradores/vendedores de pescado | 274 | 14 897 463 |
| Varios | 42 | 1 189 342 |
| Gobierno español | 5 | 662 505 963 |
| Total | 741 | 829 278 681 |

- 4.4 La primera reclamación recibida del Gobierno español fue evaluada provisionalmente por el Director en diciembre de 2003 en €107 millones (£72 millones). En cuanto a los pagos al Gobierno español, se hace referencia en la sección 11.

- 4.5 Desde diciembre de 2003, han tenido lugar varias reuniones con representantes del Gobierno español y se ha facilitado considerable información nueva en apoyo de sus reclamaciones. Continúa la cooperación con los representantes del Gobierno español y se está avanzando en la evaluación de las reclamaciones presentadas por el Gobierno.
- 4.6 De las demás 736 reclamaciones presentadas, se ha evaluado el 65%. Muchas de las reclamaciones restantes carecen de suficiente documentación de apoyo, documentación que se ha pedido a los reclamantes. Cuatrocientas catorce de estas otras reclamaciones por €23,4 millones (£16 millones) han sido aprobadas en €2,4 millones (£1,6 millones) y se han efectuado pagos provisionales por un total de €3 118 (£56 000)^{<2>} al 15% de la cuantía valorizada respecto a 79 de las reclamaciones aprobadas. Las restantes reclamaciones aprobadas esperan respuesta de los reclamantes o están siendo examinadas de nuevo a raíz del desacuerdo de los reclamantes con la cuantía valorizada. Se han rechazado ciento diecisiete reclamaciones por €10 millones (£6,8 millones), en su mayoría porque el reclamante no ha demostrado haber sufrido pérdida.
- 4.7 En la sesión del Comité Ejecutivo de mayo de 2004, la delegación española manifestó que 67 ayuntamientos habían pedido indemnización por un total de €37,6 millones (£25,5 millones) y que las cuatro comunidades autónomas afectadas habían estimado sus daños en €150 millones (£102 millones). La delegación manifestó también que las cantidades reclamadas esperaban la aprobación del Estado antes de efectuarse los pagos a estas administraciones públicas. En mayo de 2005, 52 ayuntamientos de Galicia firmaron acuerdos con el Gobierno español, y se esperaba que otros tres firmasen acuerdos en un futuro próximo. Otros 20 ayuntamientos de Asturias han aceptado propuestas del Gobierno español. En la sesión del Comité Ejecutivo de junio de 2005, la delegación española informó al Comité que el Gobierno español presentaría reclamaciones por los costes incurridos por las regiones autónomas y ayuntamientos que habían sido pagados por el Gobierno y por los costes incurridos en la eliminación de los residuos oleosos. Aquella delegación manifestó que esperaba presentar estas reclamaciones junto con las reclamaciones valorizadas por el Consorcio a fines de 2005 o principios de 2006.

Francia

- 4.8 Al 20 de septiembre de 2005, se habían recibido 410 reclamaciones por un total de €97 millones (£66 millones) en la Oficina de Reclamaciones de Burdeos. El cuadro a continuación presenta un desglose de los diferentes tipos de reclamaciones.

| Categoría de la reclamación | No. de reclamaciones | Cuantía reclamada € |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Daños materiales | 9 | 87 772 |
| Limpieza | 38 | 7 682 256 |
| Maricultura | 120 | 1 712 788 |
| Marisqueo | 3 | 116 810 |
| Embarcaciones de pesca | 54 | 846 000 |
| Turismo | 164 | 17 985 252 |
| Elaboradores/vendedores de pescado | 9 | 301 446 |
| Varios | 12 | 779 521 |
| Gobierno francés | 1 | 67 499 154 |
| Total | 410 | 97 011 000 |

- 4.9 De las 410 reclamaciones presentadas a la Oficina de Reclamaciones, se ha evaluado el 73%. Muchas de las reclamaciones restantes carecen de suficiente documentación de apoyo, documentación que se ha pedido a los reclamantes. Se han aprobado doscientas setenta y una reclamaciones en €5,9 millones (£4 millones) y se han efectuado pagos provisionales de un total de €703 543 (£476 000) al 15% de la cuantía valorizada respecto a 117 de las reclamaciones

^{<2>}

Se han deducido los pagos de indemnización efectuados por el Gobierno español a los reclamantes al calcular los pagos provisionales.

aprobadas. Las restantes reclamaciones aprobadas esperan respuesta de los reclamantes o están siendo examinadas de nuevo a raíz del desacuerdo de los reclamantes con la cuantía valorizada. Se han rechazado cincuenta y cinco reclamaciones, en su mayoría porque el reclamante no ha demostrado haber sufrido pérdida.

- 4.10 Ciento cuatro ostricultores con base en la laguna de Arcachón cerca de Burdeos han presentado reclamaciones por un total de €807 037 (£547 000) por pérdidas supuestamente sufridas a consecuencia de la resistencia del mercado debida a la contaminación. Estas reclamaciones han sido examinadas por los expertos contratados por el London Club y el Fondo de 1992, y 91 de ellas, por un total de €701 686 (£475 000), han sido evaluadas en €263 253 (£179 000). Las trece reclamaciones restantes han de ser examinadas por los expertos. Se han efectuado pagos por un total de €16 343 (£11 000) respecto a 28 de estas reclamaciones en el 15% de la cuantía evaluada.
- 4.11 En septiembre de 2005, representantes del Fondo de 1992 y los expertos designados por el Fondo de 1992 se reunieron con la Association Interprofessionnelle pour le Développement de la Pêche Artisanale (ASSIDEPA), que representa a los reclamantes de la pesca, y el Centre de Gestion et de Comptabilité Agricole (CGCA), que representa a los reclamantes ostricultores. Se discutieron los problemas encontrados al evaluar las reclamaciones pendientes entre estos representantes y los representantes del Fondo de 1992. Se designó un representante de cada asociación para mantener nuevas conversaciones con los expertos del Fondo a fin de completar las evaluaciones pendientes lo antes posible.
- 4.12 La Oficina de Reclamaciones ha recibido 164 reclamaciones relacionadas con el turismo por un total de €17,9 millones (£12 millones). Ciento dieciocho de estas reclamaciones han sido evaluadas en un total de €5,2 millones (£3,5 millones). Cien reclamaciones han sido aprobadas en €4,5 millones (£3 millones) y se han efectuado pagos provisionales por un total de €50 859 (£373 000) en el 15% de la cuantía evaluada con respecto a 62 reclamaciones.
- 4.13 En mayo de 2004, el Gobierno francés presentó una reclamación de €67,5 millones (£45,7 millones) en relación con los costes contraídos por limpieza y medidas preventivas. Expertos designados por el Fondo de 1992 y el London Club están evaluando esta reclamación. En octubre de 2004, representantes del Fondo y los expertos de éste se reunieron con representantes del Gobierno francés para discutir el proceso de evaluación y qué nueva información se precisaba para completar dicha evaluación. Tras una evaluación preliminar de la reclamación que había hecho el Gobierno, se envió al Gobierno francés una solicitud oficial de nueva información en agosto de 2005.
- 4.14 Otras 38 reclamaciones, por un total de €7,7 millones (£5,2 millones), han sido presentadas por las autoridades locales por costes de operaciones de limpieza. Veinte de esas reclamaciones se han evaluado en €3,4 millones (£2,3 millones). Catorce reclamaciones han sido aprobadas en €62 037 (£651 000) y se han efectuado pagos provisionales de un total de €120 889 (£82 000) al 15% de la cuantía valorizada respecto a 10 reclamaciones.

Portugal

- 4.15 En diciembre de 2003, el Gobierno portugués presentó una reclamación de €3,3 millones (£2,2 millones) respecto a limpieza y medidas preventivas. En julio de 2004, tuvo lugar una reunión entre representantes del Fondo de 1992 y representantes de los departamentos gubernamentales involucrados. En febrero de 2005, el Gobierno portugués facilitó al Fondo de 1992 información adicional en apoyo de su reclamación. La documentación adicional incluía una reclamación complementaria de €1 millón (£677 000) también respecto a limpieza y medidas preventivas. Las reclamaciones se han evaluado provisionalmente en €1,5 millones (£1 millón).

5 Caducidad

- 5.1 En virtud del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, los derechos a indemnización por el propietario del buque y su aseguradora prescribirán a menos que se interponga una acción dentro

de los tres años a partir de la fecha en que se haya producido el daño (artículo VIII). En cuanto al Convenio del Fondo de 1992, los derechos de indemnización por el Fondo de 1992 prescribirán, a menos que el reclamante o bien interponga una acción contra el Fondo dentro de este plazo de tres años o bien notifique al Fondo dentro de ese plazo una acción contra el propietario del buque o su aseguradora (artículo 6). Ambos Convenios prevén que en ningún caso podrá interponerse acción alguna una vez transcurridos seis años desde la fecha del suceso.

- 5.2 En septiembre de 2005, se enviaron cartas individuales a todos aquellos que habían presentado reclamaciones a las Oficinas de Reclamaciones en España y Francia, y con quienes para entonces no se habían logrado acuerdos sobre la cuestión de la caducidad. Se están poniendo anuncios en la prensa nacional y local en España y Francia, llamando la atención sobre la cuestión de la caducidad. Respecto al siniestro del *Prestige* tal vez sea incierto a partir de qué día comienza a contarse el plazo de tres años para el reclamante individual (es decir, el día en que ocurrió el daño del reclamante respectivo). En vista de la incertidumbre sobre el comienzo del plazo de caducidad, se sugiere en las cartas y en los anuncios que los reclamantes asuman que el plazo de caducidad comenzó el día del siniestro (es decir, 13 de noviembre de 2002) a fin de evitar el riesgo de que caduquen las reclamaciones. Se aclara también que, incluso si un reclamante ha interpuesto acción, ello no impedirá nuevas deliberaciones sobre su reclamación con el fin de lograr una transacción extrajudicial.
- 5.3 En la reunión de septiembre de 2005 con los representantes de ASSIDEPA y CGCA mencionada en el párrafo 4.11 supra, el representante del Fondo de 1992 aprovechó la oportunidad de llamar la atención de los representantes de estos reclamantes sobre el tercer aniversario del siniestro que se avecina, y sobre las medidas que han de adoptar aquellos reclamantes cuyas reclamaciones no hubieran sido acordadas al 13 de noviembre de 2005 para impedir que caduquen las reclamaciones.

6 Pagos y otra asistencia financiera de las autoridades españolas

- 6.1 El Gobierno español y las autoridades regionales han efectuado pagos de unos €40 (£27) por día a todos aquellos directamente afectados por las vedas de pesca. Éstos comprenden mariscadores, pescadores de bajura y trabajadores conexos en tierra con alta dependencia de los caladeros cerrados, tales como vendedores de pescado, reparadores de redes y empleados de cooperativas de pesca, lonjas del pescado y fábricas de hielo. Algunos de estos pagos se han incluido como reclamaciones subrogadas en la reclamación del Gobierno español, en virtud del artículo 9.3 del Convenio del Fondo de 1992.
- 6.2 El Gobierno español ha prestado ayuda también a otras personas y empresas afectadas por el derrame de hidrocarburos en forma de préstamos, desgravación fiscal y dispensas de los pagos a la seguridad social.
- 6.3 En junio de 2003, el Gobierno español aprobó la legislación en forma de un Real Decreto-Ley que ponía €160 millones (£108 millones) a disposición para indemnizar íntegramente a los damnificados por la contaminación. Para recibir indemnización, los reclamantes debían presentar sus reclamaciones a más tardar el 31 de diciembre de 2003, renunciar al derecho de reclamar indemnización de cualquier otra forma en relación con el siniestro del *Prestige* y transferir sus derechos de indemnización al Gobierno español. El Decreto prevé que la evaluación de las reclamaciones se efectuará según los criterios empleados para aplicar los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992.
- 6.4 En julio de 2004, otro Real Decreto-Ley incrementó los fondos disponibles para la indemnización a €249,5 millones (£169 millones). Además, el Decreto prorrogaba el plazo en que las personas de los sectores de pesca, marisqueo y acuicultura podían reclamar por pérdidas sufridas directamente a consecuencia del siniestro, para incluir el año 2004. Los fondos disponibles para la indemnización por pérdidas ocurridas durante 2004 estaban limitados por el Decreto a €2 millones (£2 millones). Los reclamantes debían presentar las reclamaciones por dichas pérdidas a más tardar el 31 de marzo de 2005.

- 6.5 En la sesión del Comité Ejecutivo de febrero de 2004, la delegación española mencionó que el Gobierno español había recibido casi 29 000 solicitudes de indemnización por parte de los afectados por el siniestro del *Prestige* que deseaban utilizar el mecanismo de pago previsto en el primer Real Decreto-Ley. Asimismo se mencionó que, de ellas, unas 22 800 solicitudes se referían a los colectivos de trabajadores del sector de pesca que se acogerían al sistema de cálculo mediante estimación objetiva o baremo. Se indicó que unas 5 000 solicitudes de otros colectivos serían objeto de una valoración individualizada.
- 6.6 En mayo de 2005, el Gobierno español informó al Fondo de 1992 que se habían logrado acuerdos con unos 19 500 trabajadores del sector de pesca y se les habían efectuado pagos por un total aproximado de €88 millones (£60 millones) en virtud de los Reales Decretos-Ley. Se espera que las reclamaciones que se habían presentado en los procedimientos judiciales ante el juzgado de lo penal de Corcubión (España) en nombre de estos trabajadores sean retiradas tras alcanzar acuerdo con el Gobierno español conforme a los Reales Decretos-Ley (véase párrafo 12.1).
- 6.7 En 2004, el Gobierno español informó al Fondo de 1992 que las reclamaciones que conforme a los Decretos serán objeto de valoración individualizada, serán evaluadas por el Consorcio de Compensación de Seguros (el Consorcio), una organización de seguros de propiedad estatal constituida para pagar reclamaciones por daños normalmente no cubiertos por pólizas de seguro comerciales, tales como daños debidos a actividad terrorista o desastres naturales. Al 20 de septiembre de 2005, el Consorcio había recibido 971 reclamaciones relativas a unas 3 700 personas.
- 6.8 Como los Reales Decretos-Ley prevén que la evaluación de las reclamaciones se efectúe siguiendo los criterios empleados para aplicar los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992, han tenido lugar reuniones entre representantes del Consorcio y el Fondo de 1992 para discutir los criterios. Las reclamaciones recibidas por el Consorcio han sido clasificadas como sigue:

| Categoría de la reclamación | Número de reclamaciones |
|--|-------------------------|
| Maricultura (daños materiales y lucro cesante) | 103 |
| Pesca (daños materiales y lucro cesante) | 179 |
| Vendedores de pescado y marisco (lucro cesante) | 310 |
| Elaboradores de pescado y marisco (lucro cesante) | 79 |
| Empleados del sector de pesca (lucro cesante) | 109 |
| Turismo (lucro cesante) | 86 |
| Tierra (daños y lucro cesante durante operaciones de limpieza) | 72 |
| Daños materiales | 14 |
| Varios | 19 |
| Total | 971 |

- 6.9 La cuantía total reclamada asciende a €229,9 millones (£156 millones).
- 6.10 El Consorcio ha solicitado la asistencia de los expertos designados por el London Club y el Fondo de 1992 en la valoración de 243 de estas reclamaciones por un total de €48 millones (£33 millones). Muchas de las reclamaciones que se han remitido a estos expertos no vienen apoyadas por suficientes pruebas que demuestren las pérdidas reclamadas. El Consorcio ha solicitado más pruebas e información a los reclamantes. Los expertos del Consorcio y los expertos designados por el London Club y el Fondo de 1992 han hecho valoraciones conjuntas de 161 reclamaciones. Ciento cuarenta y ocho de estas reclamaciones, por €10 millones (£7 millones) han sido aprobadas por el Fondo de 1992 y el London Club en €1,5 millones (£1 millón). Ciento treinta y cuatro reclamaciones, incluidas en las 243 reclamaciones para las que el Consorcio ha solicitado asistencia, también han sido presentadas directamente a la Oficina de Reclamaciones.

Se han facilitado al Consorcio pormenores de 83 de las valoraciones conjuntas, con la aprobación de los reclamantes. Están en marcha nuevas valoraciones.

7 Pagos y otra asistencia financiera de las autoridades francesas

- 7.1 El Gobierno francés ha introducido un plan para facilitar pagos superiores a las cuantías pagadas por el Fondo de 1992 a los reclamantes de los sectores de pesca y marisqueo que formularon una solicitud a ese efecto antes del 13 de diciembre de 2004. En enero de 2005, se efectuaron pagos a 175 reclamantes por un total de €1 153 621 (£781 000).
- 7.2 El Gobierno francés ha informado al Director de que estos pagos eran anticipos sobre los pagos que ha de efectuar el Fondo de 1992 y han de ser reembolsados por los reclamantes, y que el Gobierno no cursará reclamaciones subrogadas contra el Fondo de 1992 respecto a los pagos efectuados.

8 Responsabilidad del propietario del buque

La cuantía de limitación aplicable al *Prestige* conforme al Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 es aproximadamente de 18,9 millones de DEG o €22 777 986 (£15,4 millones). El 28 de mayo de 2003, el propietario del buque depositó €22 777 986 en el Juzgado de lo penal de Corcubión (España) con el fin de constituir el fondo de limitación.

9 Cuantía máxima disponible en virtud de los Convenios de 1992

- 9.1 La cuantía máxima de indemnización disponible en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992 es 135 millones de DEG por siniestro, incluida la suma pagada por el propietario del buque y su asegurador (artículo 4.4 del Convenio del Fondo de 1992). Esta cuantía debe convertirse a la moneda nacional, utilizando como base el valor la moneda de que se trate en relación con el DEG en la fecha de la decisión de la Asamblea acerca de la primera fecha del pago de indemnización.
- 9.2 Aplicando los principios estipulados por la Asamblea en el caso del *Nakhodka*, el Comité Ejecutivo decidió en febrero de 2003, que la conversión en el caso del *Prestige*, se hiciese sobre la base del valor del euro con referencia al DEG en la fecha de la aprobación del Acta de las Decisiones del Comité de dicha sesión, es decir, el 7 de febrero de 2003. Por consiguiente, 135 millones de DEG corresponden a €71 520 703 (£116 millones).

10 Nivel de pagos

El Director volverá sobre esta cuestión en una adición al presente documento, junto con una propuesta sobre el nivel de los pagos.

11 Pagos al Gobierno español

- 11.1 En la sesión del Comité Ejecutivo de octubre de 2003, la delegación española propuso que el Fondo de 1992, a reserva de ciertas condiciones, anticipase a cuenta los pagos al Gobierno español y a los Gobiernos de otros Estados afectados que desearan recibir tales anticipos. Dada la importancia de la cuestión y las ramificaciones que entrañaba, el Comité Ejecutivo decidió remitir la cuestión a la Asamblea.
- 11.2 Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales del siniestro del *Prestige*, la Asamblea decidió lo siguiente (documento 92FUND/A.8/30, párrafo 20.29):
- a) La Asamblea autorizó al Director, a reserva de una evaluación general efectuada por el Director de los daños admisibles totales en España derivados del siniestro del *Prestige*, a efectuar el pago de la diferencia entre el 15% de la cuantía evaluada de la reclamación presentada el 2 de octubre de 2003 y el 15% de dicha reclamación presentada (15% de

€83,7 millones = €7 555 000), y también a reserva de que el Gobierno de España facilitase una garantía de una institución financiera, no del Estado español, que tuviera la solvencia financiera estipulada en las Directrices Internas de Inversiones del Fondo de 1992, a fin de proteger al Fondo de 1992 contra una situación de exceso de pago.

- b) La Asamblea decidió que dicha garantía cubriría la diferencia entre el 15% de la cuantía evaluada de la reclamación presentada el 2 de octubre de 2003 y el 15% de esa reclamación presentada (15% de €83,7 millones = €7 555 000). Además, se decidió que el pliego de condiciones de la garantía debería ser a satisfacción del Director.
- 11.3 La Asamblea decidió que el Comité Ejecutivo revisase, en su siguiente sesión, los pagos efectuados. También se decidió que, si el Comité redujese la cuantía del pago, el Gobierno español tendría que reembolsar la diferencia.
- 11.4 Se decidió también que, si cualquier otro Estado que hubiera sufrido pérdidas relacionadas con el siniestro del *Prestige* procurase la misma solución para los pagos en las mismas condiciones, dicha solicitud debería remitirse al Comité Ejecutivo.
- 11.5 Con la asistencia de una serie de expertos, el Director llevó a cabo una evaluación provisional de la reclamación del Gobierno español. Basándose en la documentación facilitada, llegó a una evaluación preliminar de €107 millones y sobre esa base el Fondo de 1992 efectuó un pago de €16 050 000 (£11,1 millones), correspondiente al 15% de la evaluación provisional.
- 11.6 Además, el Director, con la asistencia de una serie de expertos, también llevó a cabo una evaluación general del total de los daños admisibles en España, y concluyó que dichos daños admisibles serían al menos de €303 millones (£205 millones).
- 11.7 Sobre esa base, y como lo autorizara la Asamblea, el Director efectuó un pago adicional de €41 505 000 (£28,8 millones), correspondiente a la diferencia entre el 15% de €83,7 millones o €7 555 000 y el 15% de la cuantía preliminar evaluada de la reclamación del Gobierno, €16 050 000. Ese pago se efectuó contra una garantía bancaria que proporcionó el Gobierno español, que cubre la diferencia arriba mencionada (esto es €41 505 000), del Instituto de Crédito Oficial, un banco español de gran solvencia en el mercado financiero, y el compromiso del Gobierno español de reembolsar toda cuantía del pago que decida el Comité Ejecutivo o la Asamblea.
- 11.8 El pago al Estado español de un total de €7 555 000 (£39 914 906) se efectuó el 17 de diciembre de 2003.

12 Acciones judiciales

España

- 12.1 Unas 2 020 reclamaciones han sido depositadas en los procedimientos judiciales ante el juzgado de lo penal de Corcubión (España). Doscientas trece de estas reclamaciones son de personas que han presentado reclamaciones directamente al London Club y el Fondo de 1992, a través de la Oficina de Reclamaciones de La Coruña. No se han facilitado al juzgado detalles de las pérdidas sufridas. Se espera que los reclamantes que han alcanzado acuerdos con el Gobierno español, conforme a los Reales Decretos-Ley, retiren sus reclamaciones del juzgado.

Francia

- 12.2 A petición de varias comunas, el Tribunal Administrativo de Burdeos designó peritos para determinar el alcance de la contaminación en varias localidades de la zona afectada.
- 12.3 En julio de 2003, cinco ostricultores comenzaron un procedimiento sumario contra el propietario del buque, el London Club y el Fondo de 1992 ante el Tribunal de Comercio de Marennes

d'Oléron solicitando pagos provisionales de cuantías por un total aproximado de €400 000 (£271 000). En julio de 2004, el Tribunal dictó sentencia sumaria en la que rechazó la solicitud por razón de que los reclamantes no habían presentado suficientes pruebas para justificar un procedimiento sumario. En su fallo, el Tribunal invitaba a los reclamantes a presentar sus reclamaciones en la Oficina de Reclamaciones de Burdeos. No se han recibido esas reclamaciones.

Estados Unidos

- 12.4 El Estado español ha entablado acción judicial contra la American Bureau of Shipping (ABS), la sociedad de clasificación del *Prestige*, en el Tribunal federal de primera instancia de Nueva York (el Tribunal de Nueva York) solicitando indemnización por todos los daños causados por el siniestro, que en principio se estimaba excederían de US\$700 millones (£388 millones) y posteriormente excederían de US\$1 000 millones (£554 millones). El Estado español ha sostenido, entre otras cosas, que la ABS había sido negligente en la inspección del *Prestige* y no había detectado corrosión, deformación permanente, materiales defectuosos y fatiga en el buque, y había sido negligente al conceder la clasificación.
- 12.5 La ABS negó la alegación hecha por el Estado español y a su vez entabló acción judicial contra el Estado argumentando que, si el Estado sufrió daños, ello fue causado en su totalidad o en parte por su propia negligencia. ABS ha hecho una contrademanda y ha solicitado que se ordene al Estado indemnizar a la ABS por toda cuantía que ABS esté obligada a pagar en virtud de toda sentencia contra ella en relación con el siniestro del *Prestige*. El Tribunal de Nueva York desestimó la contrademanda de ABS por razón de que el Estado español tenía derecho a inmunidad soberana. ABS solicita nuevo examen por el Tribunal o venia para apelar.
- 12.6 Como parte del procedimiento de aportación de pruebas en la litigación de Nueva York, la ABS pidió que el Estado español presentase todos los documentos y material que forma parte del expediente del juzgado penal de Corcubión que investiga el siniestro del *Prestige*, así como todos los documentos y material examinados por la Comisión Permanente de Siniestros Marítimos en España. El Estado español respondió afirmando que los documentos y material pedidos estaban protegidos contra su divulgación por privilegio en virtud del derecho procesal español. La ABS presentó disconformidad con la afirmación de privilegio. En una decisión dictada en agosto de 2005, tras tener en cuenta los diversos intereses en pugna involucrados, el Tribunal de Nueva York denegó la afirmación de privilegio del Estado español y ordenó que se presentasen los documentos. El Estado español ha apelado contra esta decisión.
- 12.7 El 10 de septiembre de 2005, el Estado español presentó una petición al juzgado penal de Corcubión sosteniendo que estos documentos y material estaban privilegiados en virtud del derecho procesal español y no se podían facilitar a la ABS, y pidió al juzgado penal que adoptase una decisión sobre esta cuestión. Hasta ahora no se ha dictado decisión.
- 12.8 Las autoridades regionales del País Vasco (España) entablaron acción judicial contra ABS en el Tribunal federal de primera instancia de Houston, Texas, reclamando indemnización por costes de limpieza y pagos efectuados a personas y empresas por US\$50 millones (£27,7 millones). Las autoridades han argumentando, entre otras cosas, que ABS había incumplido su deber de inspeccionar suficientemente el *Prestige* y había clasificado el buque como navegable cuando no lo era. Esta acción judicial ha sido transferida al Tribunal de Nueva York que se encarga de la reclamación del Estado español referida en el párrafo 12.4. La ABS ha pedido venia al Tribunal de Nueva York para cursar una reclamación de indemnización contra el Estado español, procurando la recuperación de la cuantía por la que pueda ser responsable a la Región Vasca. El Tribunal aún no ha dictado decisión al respecto.

13 Acción de recurso del Fondo de 1992 contra la ABS

- 13.1 En su sesión de octubre de 2004, el Comité Ejecutivo decidió que el Fondo de 1992 no incoase una acción de recurso contra la ABS en los Estados Unidos y que se aplazara toda decisión sobre una acción de recurso contra ABS en España hasta que se revelasen más pormenores sobre la

causa del siniestro del *Prestige*. El Comité afirmó explícitamente que esta decisión era sin perjuicio de la postura del Fondo con respecto a las acciones judiciales incoadas contra otras partes (documento 92FUND/EXC.26/11, párrafos 3.7.42 – 3.7.72).

- 13.2 Se encargó al Director que siguiera la litigación en curso en los Estados Unidos, supervisara las investigaciones en curso sobre la causa del siniestro y adoptara las medidas necesarias para proteger los intereses del Fondo de 1992 en cualquier jurisdicción pertinente (documento 92FUND/EXC.26/11, párrafo 3.7.71).

14 Investigaciones sobre la causa del siniestro

14.1 Autoridad Marítima de las Bahamas

La Autoridad Marítima de las Bahamas (es decir, la autoridad del estado de abanderamiento) ha llevado a cabo una investigación sobre la causa del siniestro. Un breve resumen del informe sobre la investigación fue presentado al Comité Ejecutivo en su sesión de marzo de 2005 (documento 92FUND/EXC.28/5, sección 13.1). El debate sobre el informe en la sesión se recoge en las Actas de las Decisiones (documento 92FUND/EXC.28/8, párrafos 3.4.52 – 3.4.60).

España

14.2 Ministerio de Fomento español

El Ministerio de Fomento español ha llevado a cabo una investigación sobre la causa del siniestro a través de la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos (la Comisión), que tiene el cometido de determinar las causas técnicas de los siniestros marítimos. Se presentó un breve resumen de los informes sobre la investigación al Comité Ejecutivo en su sesión de junio de 2005 (documento 92FUND/EXC.29/4, sección 13.2). El debate sobre los informes en aquella sesión se recoge en el Acta de las Decisiones (documento 92FUND/EXC.29/6, párrafos 3.2.80 – 3.2.85).

14.3 Juzgado de lo penal de Corcubión

El juzgado de lo penal de Corcubión en España está llevando a cabo una investigación sobre la causa del siniestro en el contexto de un proceso penal. El juzgado investiga el papel del capitán del *Prestige*, de un funcionario que participó en la decisión de no permitir que el buque entrase en un puerto de refugio en España y de un gerente de la empresa que administra el buque.

Francia

14.4 Ministerio francés de Transporte y del Mar

El Ministerio francés de Transporte y del Mar (Secrétariat D'État aux Transports et à La Mer) ha llevado a cabo una investigación preliminar sobre la causa del siniestro a través de la Inspección General de Asuntos Marítimos – Oficina de investigaciones – siniestros/mar (Inspection General des Services des Affaires Maritimes – Bureau enquêtes – accidents / mer (BEAmer)). Se presentó un breve resumen del informe sobre la investigación al Comité Ejecutivo en su sesión de junio de 2005 (documento 92FUND/EXC.29/4, sección 13.4). El debate sobre los informes en aquella sesión se recoge en el Acta de las Decisiones (documento 92FUND/EXC.29/6, párrafos 3.2.87 – 3.2.94).

14.5 Juez de instrucción de Brest

Un juez de instrucción de Brest está llevando a cabo una investigación penal sobre la causa del siniestro.

14.6 Intervención del Fondo de 1992

El Fondo de 1992 sigue las investigaciones en curso a través de sus abogados españoles y franceses.

15 Medidas que ha de adoptar el Comité Ejecutivo

Se invita al Comité Ejecutivo a:

- a) Tomar nota de la información contenida en este documento; y
 - b) dar al Director las instrucciones que estime apropiadas respecto a la tramitación de este siniestro y de las reclamaciones derivadas del mismo.
-